

Santiago, treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En los autos Rol N° 22712-2022 de esta Corte Suprema, el Ministro de Fuero señor Álvaro Mesa Latorre, por sentencia de 22 de julio de 2021, condenó, con costas, en lo que interesa a los recursos, a Domingo Antonio Campos Collao y Víctor Matus Vásquez a la pena de dieciocho años de presidio mayor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autores de los delitos de secuestro calificado en las personas de Sergio del Carmen Navarro Schifferli y José Andrés Meliquén Aguilera, perpetrados en la comuna de Lautaro, el 04 de octubre de 1973, ilícitos previstos en el artículo 141 del Código Penal, en su carácter de lesa humanidad.

En lo referente a la parte civil, la sentencia acogió la demanda, condenando a pagar la suma de ciento cincuenta millones de pesos a Ilda Teresa Morales Jaque, René Enrique Meliquen Morales, Verónica Del Pilar Meliquen Morales, María Griselda Meliquen Morales, Tránsito Del Carmen Meliquen Morales y Domingo Benedicto Meliquen Morales, cónyuge e hijos de la víctima José Andrés Meliquén Aguilera.

Por su parte, reguló la cantidad de cien millones de pesos respecto de Carlos Antonio Navarro Schifferli y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, hermano y sobrino de la víctima Sergio del Carmen Navarro Schifferli.

El fallo estableció que las sumas señaladas deberán ser reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor entre el mes



anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

Apelada dicha sentencia, la Corte de Apelaciones de Temuco, por sentencia de catorce de abril de dos mil veintidós, que rola a fojas 3.057, confirmó la sentencia de primera en instancia en la parte penal, con declaración que Víctor Matus Vásquez y Domingo Antonio Campos Collao quedan condenados a cumplir la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por los delitos de secuestro calificado en las personas de Sergio del Carmen Navarro Schifferli y José Andrés Meliquén Aguilera, perpetrado en la comuna de Lautaro, el 04 de octubre de 1973, previstos en el artículo 141 del Código Penal, en su carácter de lesa humanidad.

En la parte civil, revocó la condena en costas y confirmó la referida sentencia, con declaración de que se fija el monto de la indemnización de perjuicios, que por concepto de daño moral deberá pagar el Fisco de Chile a los demandantes Ilda Teresa Morales Jaque, René Enrique Meliquen Morales, Verónica Del Pilar Meliquen Morales, María Griselda Meliquen Morales, Tránsito Del Carmen Meliquen Morales y Domingo Benedicto Meliquen Morales, cónyuge e hijos de la víctima José Andrés Meliquén Aguilera, en la suma de \$ 100.000.000 para cada uno de ellos, con los reajustes e intereses determinados en la sentencia en alzada.

A su vez, se fija el monto de la indemnización de perjuicios, que por concepto de daño moral deberá pagar el Fisco de Chile a los demandantes Carlos



Antonio Navarro Schifferli y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, hermano y sobrino de la víctima Sergio Del Carmen Navarro Schifferli, en la suma de \$ 50.000.000 para cada uno de ellos, con los reajustes e intereses determinados en la sentencia en alzada.

Contra ese último pronunciamiento, la defensa del condenado Víctor Matus Vásquez dedujo recurso de casación en el fondo, y el abogado de los querellantes Carlos Antonio Navarro Schifferli y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos interpuso recurso de casación en la forma, en lo referente a la parte civil.

Con fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

I.- En lo tocante a la sección penal del fallo impugnado.

Primero: Que la defensa del sentenciado Víctor Matus Vásquez interpuso recurso de casación en el fondo, sin embargo, habiéndose tomado noticia de que éste falleció el 29 de junio de 2024, no se emitirá pronunciamiento sobre ese arbitrio, debiendo el juez de primer grado, recabar el certificado respectivo y dictar la resolución que en derecho corresponda.

II.- En lo tocante a la sección civil del fallo impugnado.

Segundo: Que el recurso de casación en la forma presentado por el abogado de los demandantes civiles Carlos Antonio Navarro Schifferli y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, se funda en la causal contemplada en el artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal en relación con el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil.



Señala que la sentencia recurrida comparte la apreciación que tuvo el Ministro Instructor para otorgar la indemnización reclamada, pero sin mayor explicación decide rebajar los montos a las sumas establecidas por el fallo de primera instancia.

Afirma que la sentencia recurrida carece de los criterios esenciales que motivan la decisión y por los cuales se decide rebajar sustancialmente el monto de las indemnizaciones fijadas por el juez de la instancia, entendiendo que las motivaciones expresadas no dicen relación con la extensión del daño provocado.

Añade que los razonamientos que se refieren a la regulación del monto de la indemnización contienen consideraciones genéricas y abstractas que no guardan relación con el caso concreto, pues falta una relación entre los hechos establecidos en el fallo y el monto finalmente regulado, por lo que no puede entenderse como se determinó rebajar las sumas otorgadas por el tribunal a quo.

Por ello, concluye solicitando se anule la sentencia recurrida en su aspecto civil y acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, se dicte una sentencia de reemplazo con arreglo a la ley, específicamente que se rechaza el recurso de apelación deducido por el Fisco de Chile, confirmándose la sentencia definitiva de primera instancia en todas sus partes.

Tercero: Que en cuanto a la causal de invalidación que sustenta el recurso de casación en la forma, esto es, la del N° 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, por la falta de consideraciones de hecho y de derecho que justifican la decisión de disminuir la indemnización fijada en primer grado, la determinación se adoptó por la sentencia en estudio, por las consideraciones expuestas por el fallo



del tribunal a quo, que hace referencia al sufrimiento provocado y a los medios de prueba que sirvieron para acreditarlo, precisando el tribunal de alzada que *“en cuanto a los hijos y cónyuge, y hermano y sobrino de las víctimas de esta causa, respectivamente, esta Corte estima procedente la indemnización de perjuicios por daño moral invocado, toda vez que la muerte ha provocado a sus familiares una afectación psicológica de tal entidad que resulta procedente indemnizar, al cumplirse los presupuestos legales establecidos por la ley, correspondiente determinar su evaluación, teniendo presente el daño psicológico producido en su calidad de cónyuge e hijos, respecto de la primera víctima y parientes colaterales respecto a la segunda demanda deducida, en relación a lo prolongado del dolor sufrido, y que la sentencia de autos pretende reparar después de décadas de ocurridos los hechos lo ocurrido a un familiar directo.”*

Luego, agrega que *“en cuanto al monto a fijar, y teniendo presente, que por tratarse de un daño de naturaleza subjetiva, cuya determinación queda entregada a la regulación prudencial que haga el Tribunal, esta Corte estima que con la prueba acompañada al proceso, además las distintas sentencias de nuestra Corte Suprema citadas por el apelante en estrados, respecto al quantum indemnizatorio en casos similares, aparece como más adecuado, prudencial y proporcional al daño que se ha acreditado fijar un quantum en el monto de indemnización, de la siguiente forma:*

Respecto a la demanda civil deducida por el abogado Sebastián Saavedra Cea en representación de la esposa e hijos de la víctima José Andrés Meliquén Aguilera, se determina el monto de la indemnización para cada uno de los actores



en la suma de \$100.000.000, con los reajustes e intereses determinados en la sentencia en alzada.

Respecto a la demanda civil deducida por el abogado David Alberto Morales Troncoso, en representación de Carlos Antonio Navarro Schifferli y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, hermano y sobrino de la víctima Sergio Del Carmen Navarro Schifferli, se determina el monto de la indemnización para cada uno de los actores en la suma de \$50.000.000, con los reajustes e intereses determinados en la sentencia en alzada.”

Cuarto: Que, en primer término, cabe reparar que los razonamientos desarrollados por el fallo de primer grado podrían servir tanto para fundar el monto de la indemnización fijada en esa instancia como aquella establecida por el ad quem, desde que discurre principalmente sobre la existencia del daño moral sufrido por los demandantes, lo que también efectúa el tribunal de alzada, difiriendo únicamente sobre el monto de la reparación, por lo que ambos fallos dicen relación con las circunstancias vividas por los actores a consecuencia del actuar ilegal de agentes estatales.

En otras palabras, las sentencias de primera y segunda instancia determinan el monto de la indemnización basándose en las mismas circunstancias fácticas, sin embargo, realizan una distinta cuantificación de la suma que, en el caso sub lite, sería suficiente para acercarse a la pretendida reparación, divergencia que está dentro de las facultades que tienen los jueces de la instancia en esta materia y que, en el caso sub lite, aparece debidamente fundada, lo que evidencia que en verdad por lo que se protesta es la concreta decisión a que conduce esa motivación y no la inexistencia de esta última.



Por lo dicho, al no presentarse el vicio denunciado, deberá desestimarse el recurso de casación en la forma.

Y de conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 541, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal; 767 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se declara que **se rechaza** el recurso de casación en la forma, deducido por los demandantes civiles Carlos Antonio Navarro Schifferli y Daniel Manuel Edgardo Navarro Campos, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, con fecha catorce de abril de dos mil veintidós.

El tribunal de primer grado deberá dar cumplimiento a lo indicado en el considerando primero de este fallo, en relación a Víctor Matus Vásquez.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo de la Ministra señora Letelier.

Rol N° 22.712-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por el Sr. Manuel Antonio Valderrama R., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., el Ministro Sr. Jean Pierre Matus A., la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firman la Ministra Sra. Gajardo y la Abogada Integrante Sra. Tavorari, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar en Comisión de servicios y ausente respectivamente.





En Santiago, a treinta de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

